

## México en la globalización

RODRIGO BUSTAMANTE

Víctor L. Urquidí (coordinador)  
*México en la globalización. Condiciones y  
requisitos de un desarrollo sustentable y  
equitativo*  
Fondo de Cultura Económica  
México, 1996

La transición hacia un desarrollo integral plantea los mayores retos, en particular para aquellos países de industrialización intermedia, o de economías en transición, o los países simplemente menos afortunados. La creciente vinculación económica, social, ambiental, política y cultural en el mundo ha hecho de esta cuestión un asunto compartido más complejo y apremiante. Sabemos que una estrategia de desarrollo inefectiva o incompleta puede significar la inviabilidad de todo un esquema de cooperación social o un modelo económico, y el colapso de una o más naciones en el largo plazo.

Debe comenzarse por destacar lo que significa el desarrollo sustentable y deslindarlo, ante todo, del desarrollo sostenido. El término "desarrollo sustentable" tiene su origen más relevante en el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, promovida por la Asamblea General de la ONU, emitido en 1984. El concepto fue usado repetidamente en la Declaración de Principios de la Conferencia de Río de Janeiro en 1992, dejando tácito su sentido, el que se le dio en 1984: "El desarrollo sustentable será el que se lleve a cabo sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades (...) No se puede asegurar la sostenibilidad física si las políticas de desarrollo no prestan atención a consideraciones tales como cambios en el acceso a los recursos y en la distribución de los costos y beneficios."

Esta definición permite subrayar que lo importante del desarrollo no es que éste no cese o sea sólo sostenido, sino que evite crear las condiciones de su propia extinción, atendiendo a otros elementos que muchas veces se omiten o se desconocen.

Siempre con objetividad, este texto colectivo pasa revista a los distintos temas asociados al desarrollo, expone las dificultades o las urgencias que éstos presentan y hace un balance de lo logrado y lo pendiente en cada materia. En sus dos vertientes, la internacional y la mexicana, el análisis no pierde nunca un tono sobrio y medido, aun frente a los problemas más complejos, pero deja muy en claro la gran necesidad de las sociedades organizadas y los gobiernos de atender con prontitud situaciones graves de deterioro."

Existe debate en cuanto a si el fenómeno de la globalización, en especial en su dimensión económica, ha agudizado los problemas del subdesarrollo o más bien ha abierto las puertas a nuevas, y compartidas, vías de solución. Son comunes las opiniones que de entrada asocian crecimiento económico, competencia, mercados y bienestar social, envolviéndolos en un mismo paquete discursivo, lo que oculta graves riesgos. Una virtud de este Informe es, precisamente, distinguir claramente los ámbitos propios de cada uno de estos elementos, evaluando las consecuencias positivas y negativas que su interacción tiene para el objetivo deseado de un mejor desarrollo integral. La persistencia de las desigualdades sociales entre países y dentro de ellos, y el empeoramiento de la pobreza, el hambre, la mala salud y la ignorancia son graves problemas cuya solución no admite enfoques simplistas o unidimensionales; las bondades de los mercados o el idilio por la competencia y la competitividad son guía insuficiente en la tarea multifacética por alcanzar el desarrollo social y ambientalmente sostenible. Los consensos requeridos para enfrentar desequilibrios que trascienden las fronteras nacionales, y aun las generacionales, sólo podrán ser alcanzados y nutridos con enfoques plurales y abiertos.

En su examen de la dimensión internacional, en concreto en el ámbito económico donde la globalización corre paralela a la liberalización comercial, el texto no se limita a enlistar los acuerdos comerciales que han enarbolado la bandera de un comercio más libre, ni a repetir los objetivos acordados por los organismos multilaterales. De modo más realista reconoce la importancia de las grandes transnacionales en la consecución de un comercio global liberalizado. Es cierto que la tendencia a una mayor liberación del comercio y los servicios en el mundo no ha dejado de existir y en buena medida actualmente los esfuerzos en este sentido

se llevan a cabo en la Organización Mundial del Comercio o en marcos regionales de negociación. Esta liberación, sin embargo, depende cada vez más de que las inversiones directas se eleven en el futuro, lo que a su vez está sujeto a "las estrategias de los grandes consorcios y conglomerados industriales de los países del G7, principalmente" (p. 42). Este reconocimiento nos lleva a destacar dos realidades que en distinta medida tienden a actuar en contra del fenómeno mismo de la globalización. Por un lado, no puede tenerse una idea clara de hacia dónde van los agrupamientos comerciales regionales que vemos hoy en día. Su porvenir y las relaciones entre ellos están todavía en duda, lo que "introduce alguna dosis de incertidumbre en el comercio mundial". Más aún, como lo dice el Informe, "todos los agrupamientos regionales, una vez iniciados, tienden a producir reacciones en contra de sus propios objetivos, al afectarse los intereses y los equilibrios intersectoriales preexistentes en la economía de los países integrantes" (p. 43). Por otro, algunos agrupamientos avanzados, como la Unión Europea, han conseguido mitigar los efectos de tales desequilibrios, principalmente con medidas de común acuerdo en beneficio de las zonas más desprotegidas, pero una estrategia similar aún no da frutos o está lejos de concebirse en otros bloques comerciales, como es el caso de aquellos en América Latina. Todo ello parece potenciar las reacciones en contra de la liberalización.

Podría pensarse que la cooperación económica multilateral para el desarrollo podría compensar estas disparidades y complementar las estrategias de mercados abiertos. El Informe, sin embargo, hace un balance negativo de este tema. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha establecido que los flujos de fondos para apoyar el desarrollo se han mantenido entre 56 y 60 mil millones de dólares anuales. El objetivo adoptado por los países industrializados en las Naciones Unidas de destinar al menos 0.7% de su PIB a la asistencia para el desarrollo no se ha cumplido, y esta cifra llega sólo a 0.3%, con la excepción de Suecia, Dinamarca y Noruega. Se observa que la desigualdad entre las condiciones económicas y financieras en que operan los países en vías de desarrollo y aquellas de los países de elevado nivel de industrialización "se ha ampliado y parece insalvable", en tanto no se vislumbran nuevas iniciativas institucionales de orden multilateral para remediar esta situación. Más aún, las potencias recomiendan a los países en desarrollo adoptar políticas económicas y financieras acordes a las fuerzas del mercado, lo que inclina las ventajas de nuevo en favor de las grandes empresas transnacionales o de las empresas nacionales aliadas con ellas. En el discurso de los países avanzados la cooperación económica internacional ha dejado su lugar a la recomendación de alcanzar el desarrollo con medios propios, cuando es evidente que tales medios son escasos frente a las grandes necesidades existentes. En este punto el Informe es concluyente: "deberá verse con escepticismo la posibilidad de reorientar las políticas nacionales o regionales, o las de los organismos multilaterales, hacia el desarrollo sustentable con equidad" (pp. 81-83).

El tema de las empresas transnacionales cada vez más fuertes y beneficiadas por los procesos de liberalización y globalización es recurrente en el texto. Se llega incluso a afirmar que el poderío de las empresas transnacionales puede vulnerar la soberanía real de los Estados, a la vez que constituye un peligro potencial para los acuerdos internacionales celebrados entre tales Estados soberanos en diversas materias importantes para alcanzar el desarrollo. "Las empresas transnacionales y sus conglomerados y alianzas toman decisiones, aún sin acuerdo con sus propios gobiernos, que afectan la economía [y] las situaciones sociales (...) de muchos países. Lo hacen sin consideración de los objetivos de la Carta de la ONU ni coordinación alguna con los programas y las acciones" de los organismos multilaterales acordes a tales principios (pp. 75-76).

En respuesta a los grandes intereses del capital privado transnacional, el Informe deja ver su simpatía por una mayor presencia del Estado en los asuntos económicos internos, aunque no una oposición franca a las empresas que son el vehículo de tales intereses. En la sección dedicada a México destacan las propuestas que ubican al Informe en una corriente de análisis que está a favor de un importante y renovado papel del Estado como equilibrador frente a las fallas del mercado a través de su función social. En dicha sección se hace hincapié en la persistente, y en ocasiones creciente, dualidad entre las grandes empresas privadas, nacionales y extranjeras, y las numerosas empresas de menor tamaño, por otro, que no han sido capaces de asimilarse o vincularse, mediante el establecimiento de cadenas productivas, a los grandes consorcios. Estas últimas no sólo han experimentado un descenso de su actividad económica, sino que muchas de ellas han desaparecido, en especial ahí donde los desajustes ocasionados por una acelerada liberalización han sido mayores, o donde el mercado interno se ha visto presionado por crisis en la balanza de pagos que han conducido a la aplicación de políticas fiscales y monetarias restrictivas.

La política social del Estado ha adquirido una relevancia notable, luego de que por muchos años fuera relegada a un segundo plano.

Uno de estos estudios, que ha ganado rápida popularidad, es el realizado recientemente por el economista Dani Rodrik de la Universidad de Harvard,<sup>1</sup> para quien un mundo comercial y financieramente más integrado

puede generar costos en el ámbito interno de las economías, especialmente aquellas en vías de desarrollo, que requieren de una acción estatal compensatoria. Rodrik observa que mientras más se avance en la liberalización de los mercados externos, mayores serán las posibilidades de inestabilidad social dentro de los países que buscan insertarse sin reservas a la economía global, fundamentalmente debido a tres factores: primero, la creciente facilidad con que la fuerza de trabajo de un país puede ser sustituida por otra menos costosa en otros países; segundo, las desavenencias y conflictos respecto a las prácticas e instituciones nacionales de apoyo social, que se derivan del posible desempleo causado por la liberalización; y tercero, la dificultad de los gobiernos para mantener e incrementar el gasto orientado a la seguridad social, o a programas de apoyo particulares. En otras palabras, se alerta frente a los mayores obstáculos que el Estado tiene y tendrá en el futuro para lograr una apropiada socialización de los riesgos y costos que un entorno económico de mayor integración plantea a los grupos menos protegidos en la sociedad.

El Informe de la Sección Mexicana si bien no omite mencionar las disparidades sociales que generan la globalización, o aun la ya descrita polarización entre grandes y pequeñas empresas, no encara la mayor tensión social y política que puede derivarse de la fuerte competencia que se observa en los mercados globales. Sus recomendaciones, sin embargo, coinciden de cerca con lo dicho por Rodrik, en el sentido de plantear la necesidad de una política económica que concilie los imperativos de la inserción en la economía mundial "con la urgencia de atender y resolver las ingentes necesidades sociales, entre ellas asegurar el empleo, reducir las desigualdades y construir una red básica de protección social" (p. 151).

Esta recomendación asume que los mecanismos del mercado adolecen de graves deficiencias en México, como en cualquier otro país en desarrollo, pues "existen sectores económicos y financieros de clara tendencia monopólica arraigada en viejas costumbres". Tales tendencias podrían interpretarse como manifestaciones de una lógica corporativista tradicional de la que aún no habrían escapado las empresas mexicanas o sus organizaciones representativas. Es por ello que en el texto se enfatiza la necesidad de dotar al Estado de una capacidad eficiente para llevar a cabo una política económica con amplia capacidad de regulación y reglamentación, acompañada de políticas sociales destinadas a reducir la desigualdades y garantizar un nivel de vida básico, y de medidas ambientales de largo alcance que impulsen la conservación y la valorización del capital ecológico. El desarrollo sustentable y equitativo no demanda menos. La acción del Estado recomendada debe orientarse a crear las redes de seguridad propias de una política social avanzada.

En su juicio sobre el desempeño de la estrategia de desarrollo en México, el Informe no duda en señalar la falta de coordinación en las políticas sociales y la persistencia de una problemática caracterizada por la concentración urbana, la falta de servicios de seguridad social adecuados, las deficiencias en el sistema educativo y la marginación de la población indígena. Claramente a favor de mayores presupuestos de gasto federal y estatal en rubros sociales, el Informe estima que la interacción de las políticas económicas con las sociales tendría que darse en un contexto de gasto nacional más dinámico, que en todo el mundo es la inversión neta, tanto pública como privada.

Temas de índole económica, que en sí mismos revisten una gran importancia pero que deben vincularse con el resto de la problemática planteada por el desarrollo para alcanzar los objetivos ya mencionados de la Conferencia de Río de Janeiro. Las resistencias actuales en muchos ámbitos auguran un futuro de inestabilidad en que no será logro menor obtener de los Estados y otras organizaciones la voluntad política necesaria para enfrentar con relativo éxito las dificultades presentes y futuras.

Estudios como el que ha coordinado el maestro Urquidí, con la participación de destacados investigadores mexicanos, contribuyen sin duda a la mejor comprensión de los problemas compartidos y a la visualización de oportunidades de colaboración y creación de los consensos indispensables en estos asuntos. Su lectura cuidadosa es obligada. No se trata, ciertamente, de un trabajo acabado, sino más bien de un diagnóstico que debe alentar el avance real y concreto en las diversas áreas de interés público que en él se analizan. Este documento reclama por ello una secuela, una respuesta que el tiempo y los esfuerzos de sociedad y gobierno harán posible en el futuro. Debe ésta ser, por supuesto, una secuela positiva, y no una constatación de que los rostros del subdesarrollo están aún, sin cambios importantes, entre nosotros

1. *Has Globalization Gone Too Far?*, Institute for International Economics, Washington, 1997.